

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CALI

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA PARA PROTEGER EL
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
DEFENSA Y DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

ACCIONANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
– COLPENSIONES-

ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL DE LA ZONA SUR

JESICA ANDREA BERNAL MARTIN, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.014.269.396** de Bogotá D.C. y Tarjeta profesional No. **336.441** del C.S. de la J. en calidad de apoderada de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES -**, en adelante **COLPENSIONES**, de conformidad con el poder otorgado, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, acudo ante su Despacho para instaurar **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **INTENDENCIA REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, con el objeto de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales que a continuación enuncio y los cuales se fundamentan en los siguientes hechos:

I. HECHOS

- Mediante Auto del 24 de junio de 2024 con radicado No. 2024-03-004262 se decretó la apertura del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad **LIMPIEZA INTEGRAL DEL VALLE S.A.S.** identificado con NIT 901.579.177.
- Posteriormente, se fijó aviso con radicado No. 2024-03-004963 por medio del cual, se informó a los acreedores acerca de la apertura del proceso liquidatorio a fin de que allegaran con destino al expediente y al liquidador designado los créditos a cargo de la sociedad deudora.
- En memorial correspondiente a la presentación de crédito con radicado No. **2024-01-796006 de 5 de septiembre de 2024**, se solicitó que fuesen reconocidos y graduados los siguientes valores a favor de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-** por concepto de aportes pensionales pendientes de pago:

CONCEPTO	VALOR ADEUDADO
Capital:	\$416.000
Total:	\$416.000

- Mediante traslado con radicado No. 2024-03-009639 de 6 de diciembre de 2024 el Despacho puso en conocimiento el escrito de proyecto de calificación y graduación de créditos allegados por el Liquidador.
- A través de memorial con radicado No. 2024-01-824728 de 16 de septiembre de 2024, el liquidador presentó el proyecto de calificación y graduación en el que relacionó a **COLPENSIONES** en Primera Clase por la suma de \$416.000. Por lo anterior y teniendo en cuenta que **COLPENSIONES** no presentaba inconformidad con el proyecto de calificación y graduación de créditos, NO presentó objeción al mismo.

6. Mediante Auto del 6 de mayo de 2025 con radicado No. 2025-03-004626 se convocó audiencia de resolución de objeciones, reconocimiento, calificación y graduación de créditos, aprobación de inexistencia de activos y fijación de honorarios del liquidador para el día 15 de mayo de 2025.
7. En audiencia celebrada el día 15 de mayo de 2025 contenida en Acta No. 2025-03-005043 el Despacho indicó que a pesar de no presentarse objeciones al proyecto ni al inventario realizó una revisión al proyecto de calificación, indicando que debía ser ajustado y corregido por parte del liquidador en el sentido de excluir la acreencia de COLPENSIONES, toda vez que únicamente se allegó el detalle de deuda y no se presentó la prueba idónea que acredita la existencia y cuantía de su obligación.
8. De conformidad con lo anterior, en audiencia de resolución de objeciones del 15 de mayo de 2025 se presentó recurso de reposición, indicando que el detalle de deuda presta mérito ejecutivo y es exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993. En el mismo sentido, se indicó al Despacho que en Auto del 6 de mayo de 2021 en el proceso con radicado No. 05-088-31-05-001-2021-00272-00, el Tribunal Superior de Medellín fue enfático en señalar que los estados de cuenta presentados por las Administradoras de Pensiones prestan mérito ejecutivo, sin que se exija un protocolo u anexo técnico para que dicho documento tenga validez.

En consecuencia, se indicó que el Despacho incurrió en el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto con una aplicación desproporcionada de las reglas procesales y dejando de lado las pruebas documentales que obraban en el expediente y que exige la Ley 1116 de 2006. Por tanto, se argumentó que la decisión del Despacho ocasionó, no solo una vulneración al Derecho a la Seguridad Social de los trabajadores, sino que además, ocasiona una vulneración al Derecho al Debido Proceso y Derecho a la Defensa. Por último, se citó antecedentes de la Superintendencia de Sociedades y se indicó que audiencia contenida en acta No. 2024-01-498694 del 23 de mayo de 2024, manifestó:

“(…) El despacho considera como prueba de la existencia de la obligación el certificado en el que el fondo de pensiones detalló los trabajadores o afiliados morosos en el pago de los aportes, indicando los periodos adeudados. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado presta mérito ejecutivo.”

Por tanto, se solicitó al Despacho reponer la decisión, de conformidad con los argumentos esbozados anteriormente. Sin embargo, **el recurso fue desestimado y se indicó que la providencia de mantenía incólume.**

II. DERECHOS VULNERADOS

Derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

Derecho Fundamental a la Seguridad Social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.

La Corte Constitucional en Sentencia SU - 128 de 2021, reitero la línea jurisprudencial que sostiene la corporación frente a la revisión en sede de tutela de una decisión judicial. En el escrito, hace referencia a la Sentencia C-590 de 2005, por medio de la cual la Sala Plena estableció los requisitos de procedencia de la tutela, indicando que existen requisitos de

carácter general y otros de carácter específicos que habilitan la interposición de la tutela y la procedencia de la misma.

Al respecto, la Corte sostiene que: *“Los requisitos generales son presupuestos cuyo completo cumplimiento es una condición indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento, mientras que los requisitos específicos corresponden, puntualmente, a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.”*¹

En concordancia con lo anterior, para que una decisión judicial pueda ser revisada en sede de tutela debe cumplir los siguientes requisitos generales:

1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En el proceso liquidatorio de la sociedad Limpieza Integral del Valle, hay una clara vulneración al Derecho Fundamental a la Seguridad Social de las personas afiliadas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y al Derecho al Debido Proceso y Derecho a la Defensa, como se explicara en el desarrollo del presente escrito.
2. Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada. En el desarrollo del proceso liquidatorio de la sociedad Limpieza Integral del Valle, **COLPENSIONES** agotó todos los medios de defensa, correspondientes a recursos, en los momentos procesales oportunos. Asimismo, es importante recordar que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1116 de 2006, el proceso de Liquidación Judicial adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia, en ese sentido, únicamente procedía el recurso de reposición. Por tanto, la Administradora hizo uso de todos los mecanismos de defensa disponibles y procedentes.
3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. La providencia que dejó en firme la adjudicación fue proferida el 15 de mayo de 2025 y no se han proferido nuevas providencias.
4. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

Adicionalmente, una vez validados los requisitos generales, se deben verificar los requisitos específicos; en este escenario la Corte Constitucional ha establecido que se debe cumplir al menos una de las causales específicas como se estableció en la Sentencia C-590 de 2005. En el proceso de Limpieza Integral del Valle se configuró la siguiente causal específica:

1. Violación directa a la Constitución. La Superintendencia de Sociedades Intendencia Regional de la Zona Sur, en el desarrollo del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad Limpieza Integral del Valle, desconoció el Derecho al Debido Proceso y Derecho a la Seguridad Social y violó directamente lo dispuesto en la Constitución Política, al solicitar la exclusión de la acreencia de **COLPENSIONES**, aun cuando la entidad presentó prueba de la existencia y cuantía de su obligación en el término procesal oportuno.

¹ Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 6 de mayo de 2021.

De conformidad con lo anterior, se cumplen todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para que proceda la acción de tutela.

2. AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO – ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

El debido proceso, se define como un conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.²

El Debido Proceso, representa un mecanismo de protección a los derechos de los ciudadanos, pues el Estado no puede limitarlos o cercenarlos de manera arbitraria o deliberada, toda vez que, este derecho representa un conjunto de lineamientos, parámetros o exigencias consagradas en la Ley, de aplicación obligatoria en cualquier actuación del Estado.

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010 desarrollo el concepto anteriormente enunciado indicando que:

“El debido proceso se resuelve en un desarrollo del principio de legalidad, en la medida en que representa un límite al poder del Estado. De esta manera, las autoridades estatales no pueden actuar a voluntad o arbitrariamente, sino únicamente dentro de las estrictas reglas procedimentales y de contenido sustancial definidas por la Ley. La manera de adelantar las diferentes etapas de un trámite, de garantizar el derecho de defensa, de interponer los recursos y las acciones correspondientes, de cumplir el principio de publicidad, etc., se encuentra debidamente prevista por el Legislador y con sujeción a ella deben proceder los jueces o los funcionarios administrativos correspondientes.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

2.1. AFECTACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA

En el proceso de liquidación judicial de la sociedad Limpieza Integral del Valle, adelantado ante la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de la Zona Sur, se aplica lo previsto en la Ley 1116 de 2006, norma que regula integralmente el trámite y las etapas del procedimiento de insolvencia empresarial. Durante la primera etapa del proceso, se surten, las siguientes actuaciones:

- Apertura del proceso
- Presentación de acreencias por el término de 20 días contados a partir de la desfijación del aviso.
- Traslado del proyecto de calificación y graduación de créditos, derechos de voto e inventario valorado de bienes
- Objeciones al proyecto de calificación y graduación de crédito (etapa probatoria)
- Conciliación de las objeciones presentadas al proyecto de calificación y graduación de créditos
- Resolución de objeciones presentadas al proyecto de calificación y graduación de créditos y aprobación del proyecto de calificación y graduación de créditos.

Durante el desarrollo del proceso, COLPENSIONES se hizo parte dentro del trámite de liquidación judicial en el momento procesal oportuno, cumpliendo con la carga de acreditar la existencia y cuantía de su acreencia. Para ello, allegó el detalle de deuda, documento que contiene la descripción de los conceptos reclamados, los valores correspondientes, los ciclos de aportes omitidos y la identificación de los trabajadores respecto de los cuales se

² Corte Constitucional, Sentencia C-341 de 4 de junio de 2014.

genera la obligación objeto de cobro dentro del proceso concursal. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006.

Posteriormente, el liquidador del proceso presentó el proyecto de calificación y graduación de créditos, relacionando a **COLPENSIONES** en la clase y cuantía solicitada, es por esto que, al encontrarse la entidad conforme con lo indicado por el liquidador, **NO** se presentó objeción al proyecto de calificación y graduación de créditos.

No obstante, la Intendencia Regional de la Zona Sur convocó a audiencia para la resolución de objeciones y aprobación del proyecto de calificación y graduación de créditos. Durante dicha diligencia, se dejó constancia de que ningún acreedor presentó objeciones ni al proyecto de calificación y graduación de créditos, ni al inventario de activos.

Sin embargo, en ejercicio de la facultad de control de legalidad, la Delegatura ordenó al liquidador realizar ajustes al proyecto. En particular, dentro de la parte considerativa de la decisión, se instruyó al liquidador para que excluyera a **COLPENSIONES** del proyecto de calificación y graduación, por cuanto a juicio del Despacho, la entidad no aportó prueba idónea que acreditara la existencia de la obligación alegada.

Al respecto, se hace necesario traer a colación la postura de la Superintendencia de Sociedades, quien en reiterados pronunciamientos ha indicado que sólo interferirá en las consideraciones del auxiliar de la justicia respecto de allanamientos y/o conciliaciones y aceptación de créditos no objetados, únicamente cuando se advierte que en ellas se han violados las normas de orden público, que se está controvirtiendo la legalidad de manera grosera, o que en ellas se esté cometiendo alguna clase de fraude que advierta el Despacho, porque cuando se trata de asuntos probatorios, tendría vedada la posibilidad de controlar los allanamientos a la inclusión de los créditos. Esto porque se entiende que la aquiescencia del auxiliar supone que el debate probatorio ha quedado superado y que, en efecto debe prevalecer la voluntad de las partes en un asunto que tiene contenido eminentemente patrimonial. (Subrayado fuera del texto)

Pese a lo anterior, en el proceso de liquidación judicial de la sociedad Limpieza Integral del Valle, la Intendencia Regional de la Zona Sur excluyó de manera arbitraria la acreencia de mi representada durante la audiencia de resolución de objeciones y aprobación del proyecto de calificación y graduación de créditos, a pesar de que no se presentó objeción alguna en su contra.

Esta actuación impidió que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, ejerciera su derecho a la defensa durante el traslado del proyecto, ya que, al estar conforme con el mismo, no presentó objeciones ni consideró necesario aportar pruebas adicionales. Es por tal motivo que, la decisión del Despacho vulneró el Derecho al Debido Proceso de mi poderdante, al modificar el proyecto sin brindarle una oportunidad real y efectiva para controvertir o subsanar la supuesta falta de prueba.

En este punto, resulta necesario destacar que, si bien el artículo 132 del Código General del Proceso faculta al Juez concursal para ejercer un control de legalidad con el fin de corregir o sanear vicios que configuren nulidades u otras irregularidades procesales, la misma norma establece de manera expresa que, salvo que se trate de hechos nuevos, estos no podrán ser alegados en etapas posteriores.

En consecuencia, si el Juez concursal consideraba procedente ejercer el control de legalidad para excluir un crédito ya calificado y graduado por el auxiliar de justicia, debió hacerlo previamente al traslado del proyecto de calificación y graduación de créditos, permitiendo así que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones ejerciera su derecho a la contradicción, objetando el contenido del proyecto y allegando la prueba documental que exige la Intendencia, conforme lo establece el artículo 25 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con el inciso tercero del artículo 53 de la misma Ley.

2.2. FALTA DE CONGRUENCIA EN LA PROVIDENCIA

Ahora bien, dentro de la parte resolutive de la providencia que resuelve objeciones y aprueba el proyecto de calificación y graduación de créditos contenida en Acta No. 2025-03-005043 de 15 de mayo de 2025, no se menciona la orden dada al liquidador en el sentido de excluir a **COLPENSIONES** del proyecto de calificación y graduación de créditos, por su parte, se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: RECONOCER, CALIFICAR Y GRADUAR los créditos de los acreedores del proceso de liquidación judicial que adelanta la sociedad LIMPIEZA INTEGRAL DEL VALLE S.A.S. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, presentados por el liquidador del concurso en memorial identificado con radicación 2025-01-024648, el cual deberá ser corregido y ajustado con las observaciones hechas por la Juez del Concurso en esta providencia, y presentado por el liquidador del proceso, en la oportunidad que se indicará en este proveído.”

De conformidad con lo anterior, la providencia de calificación y graduación de créditos se encuentra en contravía de lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso y se evidencia un desconocimiento de los Principios de Congruencia y Consonancia, siendo este una garantía del Derecho Fundamental al Debido Proceso.

Respecto al Principio de Congruencia, la Corte Constitucional ha indicado que *“considera que es un elemento esencial de la validez de las providencias judiciales **la congruencia** entre la parte resolutive y la motiva. Así mismo, este mandato obliga a que una decisión judicial guarde coherencia en los aspectos fácticos obrantes en el expediente con las consideraciones jurídicas que se elaboran en el fallo. En efecto es indispensable asegurar el principio de congruencia de las decisiones judiciales, el cual se predica de las pretensiones y de la sentencia, como se desprende de la normatividad procesal general. Sobre el particular, es importante resaltar que la jurisprudencia de esta Corte ha estimado que la incongruencia de una decisión tiene la virtualidad de afectar derechos fundamentales”*.³

Así mismo, la Corte Constitucional ha indicado que: *“24.1. El principio de congruencia de la sentencia, además se traduce en una garantía del debido proceso para las partes, puesto que garantiza que **el juez sólo se pronunciará respecto de lo discutido y no fallará ni extra petita, ni ultra petita, porque en todo caso, la decisión se tomará de acuerdo a las pretensiones y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso**. Esto, además, garantiza el derecho a la defensa de las partes, puesto durante el debate podrán ejercer los mecanismos que la ley ha establecido para ello en los términos adecuados.*

Por otra parte, la misma Corporación ha definido el principio de congruencia *“como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, “en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó”. Además ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.”*⁴

Por tanto, es clara y evidente la vulneración al Debido Proceso de **COLPENSIONES**, toda vez que, en primer lugar, se citó y realizó la audiencia de que trata el artículo 30 de la Ley 1116 de 2006 que no era procedente, debido a que no se presentaron objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos ni al inventario y en consecuencia, el Despacho está fallando extra petita, al excluir la acreencia de mi representada del proyecto, aún cuando, obra en el expediente prueba que acredita la existencia y cuantía de la obligación. Así mismo, dentro de los antecedentes del Auto que citó a la mencionada audiencia con radicado No. 2025-03-004626 de 6 de mayo de 2025 no se avizora lo que

³ Corte Constitucional, Sentencia T-082 de 24 de marzo de 2023.

⁴ Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 25 de agosto de 2016.

se resolvería en la audiencia y por tal motivo, tomo por sorpresa a la entidad la decisión de la Intendencia Regional de la Zona Sur.

En segundo lugar, la resolutive del Auto dictado en audiencia contenido en Acta No. 2025-03-005043 de 15 de mayo de 2025 no guarda relación con las ordenes emitidas por el Despacho en la parte motiva, toda vez que, si lo que se pretendía era excluir la acreencia de **COLPENSIONES**, así se debió indicar en la parte resolutive, con el fin de guardar la congruencia en la decisión adoptada por la Intendencia Regional de la Zona Sur. Es por esto que se configura un defecto procedimental, el cual tiene como fin *“prevenir las sorpresas en los que el funcionario judicial pueda incurrir en la resolución de un caso, dado que esa situación afectaría el principio de contradicción y defensa de un usuario de la administración de justicia.”*

2.3 MÉRITO EJECUTIVO

El detalle de deuda que genera **COLPENSIONES** presta mérito ejecutivo y es exigible conforme al tenor literal del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, que establece lo siguiente:

*“Artículo 24. Acciones de cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. **Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adecuado, presta mérito ejecutivo.**”*

En el mismo sentido, se pone de presente que mediante Auto del 6 de mayo de 2021 en el proceso con radicado No. 05-088-31-05-001-2021-00272-00, el Tribunal Superior de Medellín fue enfático en señalar que las liquidaciones de deuda presentados por las Administradoras de pensiones prestan mérito ejecutivo, sin que se exija un protocolo u anexo técnico para que dicho documento tenga validez. Sin embargo, el Despacho incurre en el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto con una aplicación desproporcionada de las reglas procesales, al no tener en cuenta las pruebas documentales que obran en el expediente y que acreditan la obligación de la entidad, así mismo, está exigiendo especificaciones, formalidades y requisitos para las liquidaciones que presenta mi poderdante, que no se encuentran determinados en la normatividad; la Ley 1116 de 2006 en su artículo 48 únicamente especifica que se debe presentar prueba de la existencia y cuantía de la obligación.

Por último, resulta indispensable citar los reiterados pronunciamientos emitidos por la Superintendencia de Sociedades, que a través de audiencia contenida en acta No. 2024-01-498694 del 23 de mayo de 2024, manifestó: *“(...) El despacho considera como prueba de la existencia de la obligación el certificado en el que el fondo de pensiones detalló los trabajadores o afiliados morosos en el pago de los aportes, indicando los periodos adeudados. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado presta mérito ejecutivo.”* Así mismo, la Intendencia Regional de la Zona Sur en audiencia de resolución de objeciones, reconocimiento, calificación y graduación de créditos contenida en Acta No. 2024-03-006869 estimó la objeción presentada por Colpensiones y se reconoció la obligación, en dicho proceso se presentó el mismo soporte documental, esto es, detalle de deuda.

En ese sentido, **COLPENSIONES** cumplió con la carga procesal, allegando la respectiva documentación y soportes que dan cuenta de la existencia y cuantía de la obligación, siendo detalle de deuda, los cuales, en virtud del artículo 24 de la ley 100 de 1993, prestan mérito ejecutivo.

3. AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL – ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Sea primero recordar que la Seguridad Social se rige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho Constitucional estipulado en el artículo 48 de la Constitución Política, el cual expresa lo siguiente: *“Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social”*. Así, la protección que le otorga el ordenamiento Constitucional al derecho a la Seguridad Social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito

internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la Seguridad Social.

A través de la Ley 100 de 1993, el Legislador creó el Sistema General de Seguridad Social. Según el artículo 31 de la mencionada Ley, el régimen solidario de prima media con prestación definida es *“aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas”*. En este régimen los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen *“un fondo común de naturaleza pública”*, que garantiza el pago de las prestaciones a quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

No obstante, lo anterior, en el transcurso del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad Limpieza Integral del Valle, a pesar de que **COLPENSIONES** cumplió con la carga procesal, al hacerse parte oportunamente en el proceso de Liquidación, allegando la respectiva documentación y soportes que dan cuenta de la existencia y cuantía de la obligación, siendo el Detalle de deuda, los cuales, en virtud del artículo 24 de la ley 100 de 1993, prestan mérito ejecutivo, el resultado es que la Intendencia resuelve excluir la acreencia.

De conformidad con lo anterior, la decisión de la Superintendencia de Sociedades Intendencia Regional de la Zona Sur de excluir la acreencia, la cual, no será pagada afecta el objeto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida que es garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la Ley 100 de 1993, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un Sistema de Pensiones.

En armonía con lo anterior, las personas afiliadas a este régimen obtendrán el derecho a la pensión de vejez, previamente establecida por la ley, cuando cumplan con los requisitos legales de edad y semanas de cotización. Por tanto, se reitera que al excluir la acreencia, afecta directamente el Derecho a la Seguridad Social, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la vida digna de los trabajadores de la sociedad Limpieza Integral del Valle, debido a que no cumplirían con uno de los requisitos para obtener los derechos a las pensiones previstas en la Ley 100 de 1993, que son las semanas de cotización.

IV. CONCLUSIONES

De conformidad con lo expuesto anteriormente, se indica lo siguiente:

1. Que **COLPENSIONES** en el término procesal oportuno remitió la liquidación en donde se evidenciaba los valores, conceptos y trabajadores a cargo de la sociedad Limpieza Integral del Valle en Liquidación Judicial, demostrando la existencia e indicando la cuantía de su obligación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006. En consecuencia, el liquidador del proceso reconoció la acreencia en el proyecto de calificación y graduación de créditos y no se presentó objeción contra ella. No obstante, el crédito resultó excluido del proceso liquidatorio.
2. Que la Intendencia Regional de la Zona Sur de la Superintendencia de Sociedades realizó un control de legalidad de una actuación en una etapa posterior vulnerando el Debido Proceso impidiendo que Colpensiones ejerciera correctamente su Derecho a la Defensa y saltándose la etapa probatoria.
3. Que la Intendencia Regional de la Zona Sur de la Superintendencia de Sociedades emitió providencia desconociendo los principios de congruencia y consonancia entre la parte motiva y la parte resolutive y en consecuencia, se vulneró el Derecho al Debido Proceso.

4. Que la exclusión de la acreencia de **COLPENSIONES** arbitrariamente causa una vulneración al Derecho a la Seguridad Social de los trabajadores por los cuales se pretende valer el crédito, toda vez que, la finalidad del proceso liquidatorio es el aprovechamiento del patrimonio del deudor.

V. PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y ordenar a favor de mi poderdante lo siguiente:

1. Tutelar el Derecho Fundamental al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
2. Tutelar el Derecho Fundamental de la Seguridad Social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.
3. Que en virtud de la protección a los Derechos al Debido Proceso y a la Seguridad Social, **ORDENAR** a la Superintendencia de Sociedades Intendencia Regional de la Zona Sur, **RECONOCER** Primera Clase Seguridad Social los valores presentados en el proceso de la sociedad Limpieza Integral del Valle.

VI. PRUEBAS

Solicito al Juez de tutela, se sirva tener en cuenta como fundamentos de los hechos las siguientes pruebas:

1. Auto de apertura del proceso de Liquidación Judicial
2. Aviso informando acerca de la apertura del proceso de Liquidación Judicial.
3. Presentación de crédito realizada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -.
4. Proyecto de calificación y graduación de créditos presentado por el auxiliar de la justicia.
5. Traslado del proyecto de calificación y graduación de créditos.
6. Auto que cita a audiencia de resolución de objeciones y aprobación del proyecto de calificación y graduación de créditos.
7. Acta donde consta lo decidido en audiencia de Resolución de Objeciones y el Recurso de reposición presentado en audiencia por **COLPENSIONES**.

VII. ANEXOS

1. Poder para actuar emitido por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
2. Mensaje de datos otorgando poder.
3. Certificado de existencia y representación legal de COLPENSIONES.
4. Resolución No. 034 de 2018.
5. Resolución No. 035 de 2024.
6. Acta de posesión.
7. Copia de la tutela y sus anexos.
8. Copia de los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

VIII. NOTIFICACIONES

La suscrita apoderada recibirá notificaciones en la dirección de correo electrónico concursoales3@capitalawgroup.com.co, coordinador@capitalawgroup.com.co y en la dirección física Av. Caracas #No. 71-44 Oficina 505 en Bogotá.

Del señor Juez,



JESICA ANDREA BERNAL MARTIN

Apoderada Colpensiones

C.C: 1.1014.269.396 de Bogotá

T.P: 336.441 del C.S. de la J.